

ARGENTINA: ¿UN EJEMPLO “PELIGROSO”?

Hace pocas semanas en un programa de televisión patrocinado por el partido ARENA, el Mayor Roberto D'Aubuisson denunció que ciertas fuerzas políticas nacionales e internacionales estaban fraguando un plan que impediría su inscripción como candidato oficial para las próximas elecciones. En esa misma oportunidad, al hacer un ferviente llamado a los oficiales de la Fuerza Armada a no dejarse llevar por los “malos consejos”, advirtió que, a la larga, la situación en El Salvador podría desembocar en algo similar a lo que está sucediendo actualmente en la Argentina.

Ciertamente ha llamado la atención la mención que D'Aubuisson ha hecho de este país sudamericano. Bien hubiera podido nombrar a Nicaragua o a Cuba, ejemplos clásicos a los que recurre el estridente anti-comunismo criollo. Pero, ¿por qué un país que acaba de realizar un proceso electoral limpio y a todas luces aleccionador para toda América Latina? La respuesta no es difícil de encontrar.

Argentina no sólo ha vuelto a la vida constitucional y democrática. También está despertando de la larga noche de los “cuchillos largos” que le impusieron los militares durante el período comprendido entre marzo de 1976 y diciembre de 1983, y lo está haciendo impartiendo justicia, o por lo menos intentando, en contra de aquellos responsables de la pesadilla vivida.

A juzgar por las primeras medidas enérgicas adoptadas por el nuevo gobierno radical de Raúl Alfonsín, se entiende por qué D'Aubuisson utiliza a la Argentina como “modelo”. Se ha derogado la “ley de amnistía” que la predecesora junta militar se había autoconcedido para “perdonar” a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas ar-

gentinas que participaron en el secuestro, tortura, asesinato y/o desaparición de más de 30.000 ciudadanos. Además se le ha dado al poder judicial la facultad para que esclarezca las responsabilidades en la “guerra sucia” (como se le denominó a la “cruzada de exterminio” desatada en contra de los opositores al régimen militar de las cúpulas castrenses y de los jefes u oficiales que se excedieron en la ejecución de las órdenes recibidas, exculpando a quienes se limitaron a cumplir lo que se les mandaba. Por el momento, se les ha iniciado juicio a algunos de ellos y se ha impedido la salida del país de más de un centenar de militares, entre los que figuran todos los integrantes de las juntas que gobernaron durante el período 76-83, como también ex-jefes de estados mayores, de la policía, de organismos diversos de seguridad, así como de capellanes, superiores de los servicios armados y de la policía.

Sin embargo esta fórmula parece resultar insatisfactoria para algunos en Argentina. Emilio Mignone, cofundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los grupos defensores de los derechos humanos más importantes de América Latina, ha declarado que Alfonsín no ha sido suficientemente “fuerte” para romper y desbandar a los servicios de inteligencia del régimen anterior que aún persisten en vigilar y seguir de cerca a “antiguos sospechosos”. Por su parte, otras fuerzas políticas, plenamente identificadas con el radicalismo, han insistido en que por muy insatisfactorias que sean, son una respuesta elaborada frente a las vaguedades del peronismo o ante el utopismo de muchos argentinos que reclaman un “nuevo Nüremberg aplicado a un ejército que nunca perdió la guerra interior y que es el que organizó las elecciones”.

El esclarecimiento de los crímenes no es el único problema que tiene que afrontar el nuevo gobierno de Alfonsín. A pesar de que nunca antes se habían dado condiciones tan favorables para romper el ciclo de la intervención militar que se venía dando durante los últimos 53 años, aún no están claros los mecanismos para asegurar la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. En este sentido, Mignone ha insistido en que "haciéndoles concesiones a los militares, mostrándoles debilidad y permitiéndoles llenarse nuevamente la mente con aspiraciones políticas, lo único que se crea son las condiciones para un futuro golpe de Estado".

Además, el gobierno debe enfrentar la peor crisis económico-financiera del país, así como mejorar las relaciones con el movimiento obrero-sindical y encarar el problema de Las Malvinas.

El legado del gobierno militar es impresionante: en septiembre de 1983 la inflación superaba el 400 por ciento anual; el dólar aumentó en el periodo 76-83 nada menos que 100 mil por ciento; la deuda externa sobrepasó los 5 mil millones de dólares; las fábricas expulsaron al 35 por ciento de sus obreros; y la desocupación alcanzó a dos millones de trabajadores.

El gobierno radical ha dicho en todos los tonos que su intención es crear las condiciones para un "pacto social"* que le conceda un espacio de acción amplio al nuevo gobierno. En cuanto al futuro inmediato de la política económica, el plan radical consiste en reducir el gasto público, comenzando por el de defensa y el de la estructura militar-industrial que alcanzan más del 23% del presupuesto. El propio presidente definió su orientación económica diciendo que el déficit presupuestario suponía "recortes muy duros. Y van a ser muy duros para las Fuerzas Armadas". Alfonsín afirmó que habría que introducir cambios importantes en el sistema impositivo "que es uno de los más agresivos de la tierra y que recae fundamentalmente en los consumos populares", buscando aumentar, "con un sentido de justicia distributiva, la presión tributaria, pero sin exageraciones, que también serían regresivas".

Ciertamente muchas de las medidas de política económica chocarán, por un lado, con los intereses de la banca internacional y de los sectores internos (militares, terratenientes, financieros) y, por el otro, con el clamor de los sectores populares a los cuales se les ha exigido una cuota también grande de sacrificio para estabilizar la economía.

En materia de política exterior, el nuevo gobierno ha logrado limar sus diferencias con Chile y se ha abierto la posibilidad de arreglar el problema territorial del Canal de Beagle. En cuanto a Las Malvinas, se le ha propuesto a Londres una fórmula de "arrendamiento" de las islas por un periodo no menor de 30 años en el cual se podría negociar su traspaso a manos argentinas. De esta manera, los radicales ratifican la reivindicación de soberanía y abren un espacio para un acuerdo apropiado. En otras áreas, sobre todo en Centroamérica, Alfonsín se ha mostrado abiertamente partidario de las gestiones del Grupo de Contadora.

Es evidente que los primeros meses del gobierno de Alfonsín estarán llenos de expectativas, y que los radicales se verán sometidos a distintas presiones que tenderán a desgarrar el consenso con el cual han asumido el poder. Sin embargo, es innegable que Argentina ha iniciado una profunda transformación política y, por lo menos hasta hoy, el proceder del gobierno, sobre todo en contra de los directores responsables de tanto crimen cometido, ha desbordado las fronteras nacionales y se ha convertido en "peligroso ejemplo" para otros tantos regímenes parecidos que hay a lo ancho y a lo largo de América Latina. Por lo menos aquí, en El Salvador, ya se empiezan a sentir sus efectos.

D.T.

* Puede ser que lo de "pacto social" también haya provocado a D'Aubuisson a mencionar el caso argentino, aunque en ningún momento, a nuestro juicio, la DC salvadoreña tiene la estatura moral y política de la Unión Cívica Radical Argentina, ni Duarte tiene la solvencia que tiene Alfonsín.